(Tomo 236:569/576)

_____ Salta, 02 de febrero de 2021.
_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "**L., C. R. VS. MAHE S.R.L.**
- AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. N° CJS 40.898/20), y _____

CONSIDERANDO:

_____ 1°) Que vienen estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 132/135 vta., en contra de la sentencia de fs. 125/129 mediante la cual se rechazó la acción de amparo deducida y se impusieron las costas por el orden causado.

_____ Para así decidir, señaló la jueza de grado que el amparo tiene por objeto la reincorporación del accionante a su puesto de trabajo y el pago de los haberes adeudados. Reseñó que la pretensión tiene como fundamento lo dispuesto por el art. 2° del D.N.U. 329/20, prorrogado por su similar 487/2020, que prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

_____ Puntualizó, con cita de precedentes de este Tribunal, que el amparo es un proceso excepcional y que el demandante se limitó a expresar que no hay otro remedio más idóneo para subsanar el grave daño que se le está produciendo. Consideró que existen vías, como las cautelares en el marco de juicios ordinarios o el proceso sumarísimo contemplado en los arts. 498/508 del C.P.C.C., que respetan las normas sobre atribución de competencia y distribución de las causas mediante sorteo. Indicó que en los amparos es el actor quien elige el juez que tramitará la acción y que es la Corte quien entiende en grado de apelación. En ese estado de situación, destacó el carácter restrictivo de la acción y concluyó en su improcedencia en el caso.

_____ Al expresar agravios (v. fs. 132/135 vta.) alega el amparista que el pronunciamiento atenta contra la jurisprudencia de esta Corte allí invocada, en tanto -afirma- se está en presencia de una cuestión urgente como lo es una pandemia mundial, que motivó el dictado de legislación de emergencia.

_____ Asevera que la sentenciante omitió tener en cuenta que cualquier otro remedio procesal, diferente al amparo, producirá la lesión de derechos constitucionales por la simple demora normal del trámite. Dice que la acción no requiere de una ley que establezca su procedencia en determinado caso, sino la lesión manifiesta de una garantía constitucional como ocurre en el supuesto particular. Esgrime que luego de la reforma constitucional de 1994 el amparo juega como una alternativa principal y no subsidiaria y, por ello, sólo en caso de existir otras vías mejores, cabe desplazarlo por ellas.

_____ Finalmente, asegura que la "a quo" resolvió que correspondía aplicar otros medios, pero sin meritarse su idoneidad o eficacia así como tampoco las actuales circunstancias que son inéditas.

_____ Corrido el pertinente traslado, la demandada lo contesta (v. fs. 139/140 vta.) y pide el rechazo del recurso por los fundamentos que allí explicita. A fs. 150/151 el señor Fiscal ante la Corte N° 2 (i) emite su dictamen y, a fs. 152 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

_____ 2°) Que el amparo es un proceso excepcional, utilizable sólo en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, pelagra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas en el art. 87 de la Constitución

Provincial por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por este remedio urgente (esta Corte, Tomo 67:473; 77:459, entre muchos otros).

De ese modo, no resulta el amparo un medio versátil de procurar solución a una gama indiscriminada de conflictos, sino una garantía a derechos de raigambre constitucional amenazados o vulnerados en forma manifiestamente arbitraria. Un ensanchamiento indebido del cauce del amparo provocaría sin dudas su deformación, con el consecuente menoscabo al principio del debido proceso por la cognición limitada que implica su trámite, y el descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional (esta Corte, Tomo 55:89; 65:257; 66:845; 73:107).

3º) Que en la especie, el actor pretende la reincorporación en su trabajo y el pago de salarios adeudados, por considerar que la decisión de la empleadora de finalizar el vínculo laboral fue adoptada en violación a las prescripciones del D.N.U. 329/20.

Ahora bien, es oportuno destacar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "la existencia de una vía legal para la protección de los derechos lesionados, excluye como regla la admisibilidad del amparo, pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces" (CSJN, Fallos, 310:1542).

Así, la acción de amparo requiere que no existan mecanismos administrativos o judiciales que permitan obtener la protección de los derechos constitucionales que se dicen vulnerados. Se ha dicho al respecto, que para habilitar la acción el amparista debe demostrar, cuanto menos en forma sucinta, la ineptitud o ineficacia de los procedimientos judiciales o administrativos previstos para dilucidar la cuestión (esta Corte, Tomo 84:659; 112:907, entre otros).

De sostenerse lo contrario, y como todo derecho posee fundamentación constitucional (art. 31 de la C.N.), correspondería lisa y llanamente derogar toda la legislación procesal vigente y tramitar cualquier cuestión por la vía del amparo, en razón de que siempre se hallaría en discusión algún derecho que necesariamente tiene rango constitucional (esta Corte, Tomo 177:751).

En tal contexto, el apelante no logra desvirtuar las consideraciones efectuadas por la jueza de grado referidas a la excepcionalidad del medio intentado, y a la existencia de otras vías judiciales aptas e idóneas para el trámite de la pretensión en las que -además- podrían discutirse con la amplitud necesaria las particulares circunstancias del caso.

Por otra parte, y en lo atinente a los cuestionamientos del apelante vinculados a que cualquier otro remedio procesal producirá la lesión de sus derechos constitucionales por la demora normal que implican, cabe recordar que la hipotética lentitud que pudiera aquejar el trámite ordinario no justifica la procedencia de la vía sumarísima del amparo (esta Corte, Tomo 67:289; 73:107; 77:571, entre otros), ya que el perjuicio que puede ocasionar la dilación de los procedimientos ordinarios no importa otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos.

En ese sentido, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia a fin de no decidir, por el sumarísimo trámite del

amparo, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios (esta Corte, Tomo 55:13; 73:121).

Además, y en lo referido al pago de remuneraciones, es procedente señalar que el objeto del amparo no puede reducirse a una mera cuestión patrimonial, pues en esos casos el demandante utiliza el procedimiento para intentar el cobro de créditos más que para buscar la protección de garantías constitucionales vulneradas, lo que constituye una pretensión propia de una sentencia de condena (cfr. esta Corte, Tomo 82:545; 83:1031, entre otros).

4°) Que debe concluirse, entonces, que no se configura en autos una extrema y delicada situación que, por carencia de otras vías legales aptas o ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origine un daño concreto y grave solo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de fs. 125/129. En cuanto a las costas, cabe distribuirlas por el orden causado en atención a la naturaleza de la cuestión debatida, y a que la normativa de emergencia pudo haber generado en el actor el convencimiento de su derecho a litigar por esta vía.

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. **RECHAZAR** el recurso de apelación interpuesto a fs. 132/135 vta. y, en su mérito, **confirmar** la sentencia de fs. 125/129. Con costas por su orden.

II. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra Bonari -firma digital-, Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Pablo López Viñals, Horacio José Aguilar, Dras. María Alejandra Gauffin y Adriana María Rodríguez Faraldo -Jueces de Corte y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-).